

LA AUSENCIA DE UNA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA O LOS DESEQUILIBRIOS DEL SISTEMA POLÍTICO

RICARDO GARCIA DUARTE*

Muchos alcanzamos a pensar que por fin la izquierda alcanzaría el millón de votos, cuando en vísperas de la elección presidencial los encuestadores le vaticinaban un 10% del electorado. Sin embargo, Lucho Garzón, su candidato, recibió sólo 680.000 votos, los que sin duda eran un reconocimiento justo para su buena campaña pero un récord aún muy bajo para lo que podría ser una fuerza independiente de izquierda, apenas el 6%. Ya unos años atrás, Navarro, excombatiente del M-19, había conseguido 700.000 votos. Ciertamente es que después sobrevino una dispersión total que se acompañó con la ausencia de candidaturas de izquierda.

Lo que en realidad hizo Lucho Garzón fue reagrupar un electorado fragmentado pero que ya había probado su existencia. Es una franja de votantes que, en los momentos de mejores augurios alcanza apenas el 6%, prueba de que es es-

tructuralmente pequeña; además de que se expresa a través de un candidato y no de una fuerza organizada.

Colombia ha tenido, no ahora sino desde siempre, una izquierda pequeña. Pero que lo haya sido así, no quiere decir que no haya hecho falta una más grande y más democrática, para que el sistema político hubiese sido más representativo y la sociedad menos violenta.

En todo caso, así ha funcionado el sistema, el mismo que incluye los procesos de “legitimación”, de “representación” y de “gobernabilidad”. Así también ha funcionado el sistema de partidos, el mismo que a través de la competencia entre distintas opciones da soporte a los procesos señalados.

Ha “funcionado” institucionalmente hablando, pero no ha logrado el objetivo central de regular e integrar las nuevas relaciones sociales que brotan en la transición hacia la modernidad. De ahí que la

* Abogado y Politólogo. Investigador de OPERA y profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

sociedad colombiana da la impresión de una esquizofrenia profunda en la que la certidumbre del orden institucional se desdobra en el desorden incierto de sus violencias frenéticas. Ahora bien, si ese “sistema”, que pareciera funcionar tan bien en el equilibrio de sus juegos internos, es juzgado por los resultados en la solución de los conflictos sociales, el dictamen no podría ser otro distinto que el del fracaso. La debacle del país indicaría que, aunque las élites pusieron a funcionar un sistema de acuerdo con sus necesidades, no pudieron levantar uno que hiciera coincidir esas necesidades con las del conjunto de la sociedad.

1. SISTEMA DE GOBIERNO Y VIOLENCIA

El orden institucional expresaba el equilibrio entre unas fuerzas más o menos orgánicas, bajo la dirección de unas élites que tramitaban sus contradicciones a través de ese mismo sistema de gobierno, diseñado para la distribución del poder entre ellas; cuestión que precisamente iba a permitir su funcionamiento.

Por lo demás, el trabajo de simbolizar intereses y de movilizar necesidades se dejaba a los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, provenientes del Siglo XIX, y capaces, en principio, de reproducir identidades heredadas. El pacto entre estos partidos, tanto para la gobernabilidad como para la distribución de las cuotas de poder, actuaba como el sello que

garantizaba el papel de cada institución política y de cada actor social; lo mismo que el equilibrio entre estos para sus respectivas demandas, con el apoyo en la fuerza que cada uno demostrara y en la astucia legal de que hiciera gala.

De ese modo, las élites políticas, de común acuerdo con la dirigencia económica, se alistaron hace cuarenta años para consolidar la modernización, sin las rupturas violentas que entre ellas mismas produjeron los retos que esta modernización proponía en las décadas del cuarenta y cincuenta. Retos referidos al cambio cultural de mentalidades, al control de la renta social y a la hegemonía sobre el Estado.

Por fuera del pacto quedaron los sectores más inorgánicos y débiles, en una sociedad en que estos configuran proporciones endémicas. Era de suponerse que su integración podía asegurarse mediante la identidad partidista y la ampliación formal de la ciudadanía. Por otra parte, en la formación de la representación política, no había lugar para una fuerza distinta al bipartidismo. Este último sería suficiente para la representación y la integración de las fuerzas existentes en la sociedad. Lo demás corría por cuenta del efecto legitimador que cumpliría el discurso de la reconciliación después de una violencia en la que el Estado colapsó y la sociedad política quedó seriamente desgarrada. El plebiscito de 1957 venía a ser, a ese propósito, no sólo la movilización electoral para abroquelar unas instituciones rehechas, sino para la movilización ideológica que bajo

el sello de la unidad nacional relegitimaba el control político por parte de los partidos tradicionales.

El fin de la violencia y la recuperación de la gobernabilidad tan anhelada, quedaron vinculados indisolublemente a los dos partidos, aliados ahora, después de desgarrarse en disputas sangrientas por su preeminencia en el Estado. El restablecimiento de la paz era, después de 1958, el elemento “refundador” que requería el Estado, pero también la cobertura ideológica para el control bipartidista. Bajo la necesidad de la paz, que era no sólo funcional a las élites divididas entre sí, sino que estaba anclada en el imaginario colectivo, se podía hacer aceptar la reconstrucción estatal bajo la forma de un juego político limitado, un juego que simultáneamente fuera ocupado por los dos partidos tradicionales.

Es más, la intervención de cualquier otro actor político en el juego, sería percibido como un factor que desestabilizaría el pacto entre las élites, indispensable éste para el manejo del poder, aunque también respaldado masivamente por la necesidad de la paz. Entonces, no habría lugar para ninguna otra fuerza política. La izquierda, cualquiera fuera el tipo de que se tratara, no tendría cabida en el modelo de régimen que estaba por echarse a andar.

La instalación de ese bipartidismo forzoso respondía ciertamente a la necesidad de garantizar la “paz política”, esto es, la convivencia entre los partidos, solo alcanzable al precio de una hegemonía con-

junta sobre el Estado. Pero el país enfrentaba un reto cuando se inauguró el Frente Nacional, forma de régimen que marcó las líneas maestras que han influido al sistema político hasta nuestros días. No sólo el reto de conseguir la paz entre los partidos, no sólo el de poner a funcionar al gobierno y a las instituciones, sino además el de consolidar una modernización de carácter incluyente.

Casi treinta años antes, una facción de las élites liberales había iniciado este proceso, para rescatar a la sociedad de los rezagos coloniales y para proporcionarle un sentido de civilidad, después de las guerras civiles y de las hegemonías autoritarias de corte eclesiástico y conservador. A este propósito, ocurrió que los años treinta proporcionaron una apertura política, institucionalizaron nuevas relaciones sociales, anunciaron algunas transformaciones en el régimen de propiedad; también provocaron grandes resistencias, pero finalmente, se quedaron como suspendidas, sin una culminación, en lo que a un cambio de estructuras sociales se refería.

No hubo una modificación seria del régimen de propiedad social, aunque constitucionalmente se abrieron las puertas para tal posibilidad. No hubo siquiera una política tributaria de carácter progresista que facilitara el cambio de ese régimen de propiedad heredado de las estructuras hacendatarias del tiempo colonial. Y no hubo, en particular, una reforma agraria que redistribuyera la propiedad en el campo, ampliara el mercado interno y propi-

ciara la base de autonomía al campesino.

Con todo, el país alcanzó su industrialización en sectores de la industria liviana, entre los años 1925 y 1940. Simultáneamente, organizó el sistema monetario y financiero desde 1923. La creciente importancia de la administración pública, sumada a los dos procesos anteriores, convirtió a las ciudades en focos de atracción, por lo que muy pronto se convertirían en los centros de la actividad social privada, además de la pública.

Por otra parte, el reformismo liberal propició una legislación laboral, que regularía las nuevas relaciones surgidas por el desarrollo industrial y comercial. Con esta legislación y con un Estado permeable al “bienestar”, se conformó una verdadera “ciudadanía social” para una población laboral que, aunque reducida, resultaba significativa. Ya antes, desde las elecciones de 1930, había comenzado un proceso efectivo de ampliación de la “ciudadanía política”, propiamente dicha. Entre ese año y 1946, muchos más ciudadanos pudieron ejercer el derecho al voto y pudieron hacerlo con mayor libertad.

La ampliación de la ciudadanía política junto con la conformación de la ciudadanía social, dieron lugar a cambios en la conformación de los sujetos colectivos que intervenían en la esfera política.

De una parte, los partidos ya no serían solo directorios de caudillos militares o de oligarcas regionales, sino más bien alianzas entre esos directorios de notables y la masa de electores, junto con distintas

organizaciones de carácter social. Lo nuevo era la presencia de la masa de ciudadanos, antes inexistente, y que ahora intervenía en la política a través de su adhesión a uno de los partidos, bajo la hegemonía indiscutible de los notables. Lo anterior con la participación, muy activa por cierto, de nuevos dirigentes salidos de las profesiones liberales, como fue el caso de muchos abogados.

De otra parte, el vacío dejado por las desaparecidas asociaciones de artesanos o por las prohibidas juntas populares, fue llenado por los sindicatos, tanto en las empresas de propiedad pública como en la industria privada. Los sindicatos le daban una base más fuerte y duradera a la población laboral.

En la formación del sindicalismo, lo mismo que en las huelgas que lo forjaron, intervinieron, como se sabe, muchos activistas que tenían una orientación de izquierda. Los ecos de la revolución bolchevique de 1917, transmitidos a través del movimiento obrero europeo, habían encontrado acogida en círculos de artesanos, de obreros y de intelectuales. Estos quisieron muy pronto, desde los años veinte, prender la llama del socialismo en una sociedad rural, fragmentada y confesional, que, sin embargo, comenzaba a ver cómo un capitalismo incipiente tomaba impulso.

2. NACIMIENTO DE LA IZQUIERDA

Las resonancias internacionales de la revolución, las posibilidades del movimien-

to social y el capitalismo incipiente ambientaron la primera tentativa de formar una izquierda socialista en el país. Es suficientemente conocida la labor de agitación realizada por algunos activistas, que pretendían vincular la ideología revolucionaria con un movimiento proletario germinal, pero prometedor, después de 1925. En este año tuvo lugar la primera tentativa para formar un “partido socialista” en Colombia; y ya en 1930, como todo el mundo lo recuerda, los revolucionarios comprometidos con las radicales corrientes del socialismo internacional fundaron el Partido Comunista, y aprovecharon el trabajo anterior para insertarse en una parte muy activa del sindicalismo, también de reciente formación.

Esto quiere decir que, de manera contemporánea con el proceso de apertura y con los aires de renovación que trajo consigo la llegada del liberalismo al poder en 1930, nació la izquierda organizada como un proyecto ideológico alternativo al sistema imperante. Apareció pues, en medio de la misma coyuntura histórica en la que el país enfrentaba su primera modernización capitalista. Esta última tenía un carácter evidentemente tardío, si se la ve bajo parámetros de comparación histórico-universales; pertenecía a una ola intermedia entre las últimas dos fases de industrialización periférica y no central.

La primera fase sobrevino con la revolución industrial de Inglaterra, bajo la forma de capitalismo de libre competencia en el siglo XVIII. La segunda fase gran-

de tuvo lugar bajo la forma de un capitalismo más concentrado y “estatalista”, tal como sucedió en la Alemania del último cuarto del siglo XIX. Esta fase de la industrialización capitalista se engarza muy pronto con una tendencia universal que atraviesa todo el engranaje de la economía mundial: el surgimiento, por un lado, de los monopolios, y por el otro, la estructuración de un capitalismo organizado de gran empresa, con producción masiva e ingresos crecientes para los obreros. La tercera fase del capitalismo mundial es de reciente data, se caracteriza por un post-industrialismo desorganizado y tiene que ver con la globalización de la economía.

El capitalismo colombiano nace después de la segunda fase universal, es decir, en la fase del proceso de concentración. Pero además, nace bajo las condiciones de una economía periférica, con alta dependencia frente a los centros capitalistas, y en medio de una sociedad hacendaria y fragmentada.

Por tales razones, su expansión no va a ser lo suficientemente rápida ni potente, tropezando, como sucedió, con un mercado interno precario y con un ahorro interno débil; y sin embargo, desembocando, paradójicamente en estructuras de monopolio tempranas. Se configura una situación de debilidad capitalista pero con tendencias al monopolio, desarrollo paradójico pero complementario, en una sociedad pequeña, que sin embargo crece en un país territorialmente grande. Así

como fue tardía la aparición del capitalismo industrial, fue temprana su tendencia al monopolio.

El hecho de que fuera débil y altamente dependiente no impidió, sino que al contrario pareció favorecer, su organización de acuerdo con los parámetros internacionales. Es decir, como capitalismo de gran empresa, bajo el modelo de producción a escala y concentración de operarios, provistos de algunas garantías laborales y con posibilidades de sindicalización. Con una nueva política económica, las élites buscaron un eslabonamiento adecuado de la economía colombiana al capitalismo mundial, en función de ampliar un mercado interno y de abastecerlo con los productos de una industria nacional.

Con las legislaciones laboral y social se propició un estatus de reconocimiento a los nuevos sectores de la población, surgidos de este desarrollo capitalista. De este modo, las reformas de los años treinta, junto con diversas políticas de diseño económico y social que siguieron en los años cuarenta, introdujeron un sesgo de “benefactor” al Estado colombiano.

La izquierda, en tanto fenómeno moderno, se asoció siempre a la idea del socialismo y, por consiguiente, constituyó un fenómeno ligado al desarrollo del capitalismo. Es una hija del capitalismo al que, sin embargo, ha querido destruir, del mismo modo como en la perspectiva freudiana el hijo quiere hacerlo con el padre.

Con cada fase del capitalismo han aparecido nuevas formas y desarrollos de

la izquierda, como opción ideológica y como proyecto de sociedad.

La introducción de las primeras máquinas en las manufacturas provocó el movimiento del *luddismo*, que conducía a los obreros a destruirlas irracionalmente porque de ese modo creían destruir al explotador. Pero rápidamente la concentración de la masa laboral y sus malas condiciones de trabajo, llevaron a la creación de sindicatos y asociaciones de trabajadores, de cuya lucha surgió la legislación laboral moderna. Esta hizo brotar su propia doctrina bautizada por algunos como *trade-unionismo*, en el que la crítica ideológica se diluía en la reivindicación sindical. Muy pronto, casi simultáneamente, la nueva realidad social planteada por la existencia del obrero fabril, despertó un nuevo pensamiento crítico, el del marxismo, que concebía la lucha social de los obreros como la de una asociación internacional de partidos políticos de carácter “comunista”. Se trataba ya no sólo de un movimiento de clase “en sí”, sino “para sí”; es decir, de una asociación internacional, que como partido político se arrogara la representación de la clase y luchara por el poder. Se trataba del socialismo marxista, que con su poderío dialéctico rápidamente derrotó al anarquismo y al *trade-unionismo*, sus competidores inmediatos.

Después, la internacionalización del capitalismo y la primera guerra mundial, su primer efecto perverso, trajeron como consecuencia la división entre socialdemócratas y comunistas. Los primeros privile-

giaban la vía parlamentaria; los segundos la vía revolucionaria. Los primeros optaban por la defensa nacional de sus países; los segundos, por una revolución internacional de clase. Estos últimos pretendían hacer de la internacionalización de la economía la base para superar las simples identidades nacionales. Pero también hacían de la defensa de un país socialista, la Unión Soviética, la causa común que contradictoriamente encarnaba su internacionalismo proletario.

La izquierda en Colombia surge inscrita en esta corriente, en 1930, con la fundación del partido comunista. Una corriente, ya para entonces, vaciada en un molde muy rígido, de ortodoxia ideológica y de marxismo revolucionario. Con esta “adarga y esta lanza”, el nuevo grupo no podía entrar a la escena política sino como un factor de confrontación antisistema, aunque subordinado por completo a la estrategia mundial soviética. Es decir, se trataba de un proyecto de partido pequeño, que nacía con toda la carga discursiva e ideológica, que lo separaba por completo de los actores reales de la sociedad colombiana, pero contradictoriamente, sin mayor autonomía en su despliegue simbólico y estratégico, subordinado como estaba a la línea impartida por la Unión Soviética.

Sentido de polarización ideológica era la carga con la que arrastraría en sus orígenes la izquierda comunista. Y al mismo tiempo, la pesadez en la elaboración simbólica y en el desarrollo estratégico, era la

herramienta precaria con la que tenía que emprender su acción en una sociedad que pretendía abandonar las anquilosadas estructuras coloniales, y adentrarse en el progreso y la modernidad; dicho esto al menos de conformidad con el discurso de la facción “lopista” del liberalismo, interesada en agenciar ese proceso. Proceso para el que sin duda hacía falta una izquierda, pero no una de acentos ideológicamente ortodoxos y vocación a la marginalidad.

3. MODERNIZACIÓN SIN IZQUIERDA

En muchos de los procesos de modernización en el mundo intervinieron movimientos de izquierda. Como fruto y a la vez, como condición de dicho proceso.

La izquierda brota de la modernización económica y cultural que abre nuevos horizontes intelectuales y que proporciona el material humano con la entrada en la escena pública de las clases subalternas, junto con los profesionales e intelectuales provenientes de las clases medias. Al mismo tiempo, la aparición de movimientos de izquierda ha presionado las transformaciones que la modernidad requiere.

En casi todo el mundo occidental, la modernización trajo aparejada la presencia de la masa en la escena pública, y con ella la aparición del movimiento social y de la izquierda ideológica, en plan de representarla. En Inglaterra fue el *trade-unionismo*, y a su lado, el *fabianismo*; más tarde,

uno y otro, transformados en *laborismo*. En Estados Unidos, el sindicalismo y distintas expresiones del anarquismo y del socialismo, más tarde diluidas en medio de mecanismos abiertos y eficaces de ascenso social que el mercado allí prodigó. En el continente europeo, la llegada del capitalismo industrial trajo el surgimiento de una izquierda vigorosa, que presionó la formación de estados-providencia, con una visión integradora.

En América Latina, esta misión integradora corrió, después del primer empuje industrial, tardío y dependiente, por cuenta del «Estado Nuevo» intervencionista y convertido en el ocupante casi único de la esfera pública, con su burocracia asistencialista y sus Fuerzas Armadas políticamente omnipresentes. A su sombra, tomaron impulso poderosos movimientos populistas, que con amplia intervención del Estado buscaban integrar a la nueva masa urbana dentro de la esfera de lo público. Así sucedió, al menos, en Brasil, desde los años treinta y en Argentina desde 1944; no así en Chile, país en el que se reprodujo el fenómeno europeo con la formación de una izquierda socialista y otra comunista. En otros países como Venezuela o Perú, la formación de élites civiles y de una esfera pública moderna sucumbió durante décadas en medio de caudillismos militares de corte patrimonial.

En Colombia, las posibilidades de una izquierda bifurcada entre socialistas y co-

munistas desaparecieron inmediatamente, en la medida en que los primeros círculos socialistas acogieron en 1930 el proyecto comunista. Después no hubo división alguna entre socialdemócratas y comunistas. A Colombia le tocó, de ese modo, una izquierda pro-soviética de signo ortodoxo, justamente bajo la égida del estalinismo, cuando éste desplegó su más visible esfuerzo totalitario durante la década de los treinta. Sería en adelante un proyecto político con inclinaciones a la marginalidad, obligado a plantearse como un desafío por fuera del sistema social y político; sin vocación y sin posibilidades de conquistar políticamente a sectores de lo que podríamos denominar el “centro” del espectro político, el cual fue ocupado de lleno, y desde entonces, por el partido liberal.

Lo anterior condujo siempre a la marginalidad de la izquierda comunista, la que cuando aspiraba a implantarse en la clase obrera y en las clases subalternas, se planteaba como proyecto radical antisistema, con efectos negativos para su implantación; y cuando necesitaba instalarse en el “centro”, renunciaba de antemano a ello. El surgimiento de la izquierda en Colombia, como izquierda comunista y estalinista, aún si en la década de los cuarenta le significó cierto sesgo reformista¹, constituyó el reflejo invertido, en el campo de las fuerzas alternativas, de un capitalismo en formación, periférico y monopolista. A un capitalismo tardío, y por consiguien-

1. Recuerdese el *Browderismo* y sus ecos en Colombia con el *Duranismo*.

te, inserto en los marcos internacionales del monopolio y de la dependencia económica, correspondió una izquierda tardía y por lo tanto inscrita en la ortodoxia soviética. A una sociedad que arrastraba con el autoritarismo de una herencia colonial y de unas jerarquías confesionales, va a corresponder una izquierda que arrastraba con el autoritarismo que se desprendía de su ideología comunista-estalinista.

Pero tal cosa nunca significó que entonces dicha izquierda prosperara y se implantara rápidamente entre la población. No lo podía hacer, precisamente porque la sociedad asistía a una coyuntura de cambio contra el confesionalismo y contra lo que ella tenía de autoritarismo. Y en esta coyuntura histórica, el que mejor se colocó fue el liberalismo, en particular, su facción lopista. A la izquierda le tocó seguir con todo su lastre de dogmatismo ideológico, en un periodo en el que el liberalismo remozado se erigió como el adalid de las reformas progresistas.

4. EL LIBERALISMO CAPTURA LAS ILUSIONES

El régimen de limitación de las libertades políticas que se establece después de la Constitución de 1886 hasta 1930, le permite a un liberalismo derrotado levantarse poco a poco como la fuerza que se identifica con las libertades, con el anti-confesionalismo y con la renovación. Mejor dicho, queda asociado con el sentido que dicta la modernidad dentro del ima-

ginario popular, lo que le legitima, al contrario de lo que le ocurre al partido conservador, el cual queda más asociado con las formas autoritarias y hegemónicas de gobierno, primero; y, más tarde, con la violencia política.

En esas condiciones, el liberalismo, que recibía el beneficio de su identidad con el cambio y con la libertad pero que ahora era más pragmático, despojado ya de su doctrinarismo decimonónico, ocupó completamente la escena pública, en lo que tiene que ver con el impulso de la modernización. Y dejó, de ese modo, sin ninguna posibilidad de concretar su proyecto a una izquierda nacida con vocación de ortodoxia ideológica y de radicalismo marginal. Así, las posibilidades de que se conformara una izquierda socialista moderada se cerraron. Los moderados prefirieron seguir las ilusiones que despertaba el reformismo limitado del liberalismo, el cual absorbía y capturaba la imaginación de sectores que pensaban en el cambio social.

De esta manera, quedó sin piso cualquiera posibilidad de proyecto de izquierda que se planteara en forma autónoma, diferente al partido comunista, impotente para cubrir esa necesidad, porque de necesidad se trataba. El reformismo liberal de 1936 necesitaba de una fuerza pujante y promisoría, a su izquierda, la que representando al movimiento social, presionara para llevar adelante las reformas modernizadoras; pero no las hubo. Sin querer queriendo, el liberalismo le sustrajo todo espacio, lo que facilitó su nueva

“hegemonía”, pero también su defeción posterior en materia de reformas. Estas se fueron aplazando bajo el temor de las élites más moderadas del liberalismo y bajo la reacción de las élites vinculadas al latifundismo, respaldadas con virulencia por ciertos sectores del conservatismo.

Bajo estas influencias, tuvo lugar en los años cuarenta la ofensiva contra el movimiento social, particularmente contra el sindical, cuya desarticulación no contó entonces con la barrera que hubiese supuesto la existencia de una fuerza socialista influyente. Esta ausencia no hizo sino facilitar la disminución de energías en dicho movimiento, lo que iba a preparar el camino para la contraofensiva “reaccionaria” y el endurecimiento del régimen entre 1946 y 1953. La violencia durante su primera fase tenía mucho de contraofensiva antireformista por parte de las élites más tradicionales y refractarias al progreso y la movilidad.

El que no hubiere brotado una fuerza más influyente de izquierda facilitó esa catastrófica conjunción astral entre el temor y retroceso de las élites liberales y la contraofensiva violenta de los conservadores, que dió al traste con el Estado y hundió a una buena parte de la sociedad en medio de la violencia. En algunos países, la modernización desembocó en el Estado de Bienestar; en otros, la modernización, sin izquierda y sin movimiento social, llevó al capitalismo pujante, pero, bajo el mando de las élites tradicionales (no liberales), desembocó más tarde en el

militarismo y el fascismo, como fue el caso de Japón.

En Colombia, la modernización sin izquierda y no impulsada por élites tradicionales conservadoras, sino por una facción liberal modernizante, pero temerosa de la reacción de aquellas, desembocó en el colapso del Estado y en períodos incesantes de violencia. Al mismo tiempo, esta violencia, acompañada del autoritarismo acentuado del régimen conservador y del régimen militar, canceló toda presencia significativa de la izquierda entre 1946 y 1960. En medio de la contraofensiva conservadora, la izquierda comunista, la única que existía, optó por refugiarse en el movimiento agrarista de algunas zonas. De allí van a surgir las bases para la guerrilla de autodefensa, origen de las FARC, que en 1965 se fundan como guerrilla de corte comunista, pero sin abandonar su reivindicación agrarista.

La reconstrucción del Estado en 1958, mediante el pacto del Frente Nacional, es un acuerdo de paz si se lo mira con relación a la violencia interpartidista que va de 1947 a 1953. Pero este mismo pacto es una contrarreforma política, si se le mira con relación al período de régimen liberal, que va de 1934 a 1944, cuando López Pumarejo abandonó el cargo en su segunda presidencia. Ya no habría más disputa libre entre los partidos por la conquista del gobierno; el sistema de gobierno funcionaría sin oposición legítima. Por su parte, el “estado de sitio” sería el mecanismo para suspender permanentemente

las garantías civiles y, sobre todo, para darle tratamiento de “orden público” a los conflictos sociales y a los grupos de izquierda, cuando quiera que se vincularan con la protesta social. El “estado de sitio” iba a ser durante 40 años el camino por el cual las élites liberales y conservadoras acogieran las actitudes confrontacionistas de la Guerra Fría contra el conflicto y la protesta social, confundidos muy a menudo con el “enemigo interior”.

Así, los retos que seguía imponiendo la modernidad, después de los sangrientos traumas que ella misma provocó y que se tradujeron en la violencia, iban a afrontarse ahora en forma altamente moderada tanto por las élites liberales como por las conservadoras, de manera conjunta. Ya no sólo sin izquierda, sino, además, sin oposición entre los propios partidos tradicionales. Después del freno que las propias élites liberales pusieron a sus reformas y después de la contraofensiva que desataron algunas de las élites conservadoras, muchas y muy importantes transformaciones quedarían pendientes. Entre ellas, la reforma agraria.

5. EL LIBERALISMO O LA PÉRDIDA DE SENTIDO HISTÓRICO

La contrarreforma política contenida en el pacto del Frente Nacional no negaba ciertamente todo intento de reformismo social entre las élites en el poder. Lo que se pretendía hacer era un reformismo moderado, pero sin un juego político

abierto. De hecho, una facción del liberalismo, encabezada por Carlos Lleras, insistía en la modernización del Estado y en llevar a cabo una reforma agraria. Pero la idea era tramitar estas transformaciones a través del pacto estrecho y contrarreformista que establecía la Constitución entre liberales y conservadores, y que no era más que la expresión del acuerdo de diversas fuerzas, que participaban del poder social, potencialmente afectadas por esa máxima modernización estatal, y por esa misma recomposición de la propiedad agraria.

El “modelo” suponía la realización de esas reformas; además, sin una fuerza de izquierda que las presionara hacia adelante, sin un juego de «gobierno-oposición», y sin un movimiento social autónomo; y sí más bien hostilizado, cuando quiera que se manifestare. Aunque hay que reconocer la tentativa que desde el Estado propició Carlos Lleras Restrepo con la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos, a fin de conseguir respaldo para la reforma agraria, y que más tarde al conseguir autonomía va a dar origen al más formidable movimiento campesino, cuyo auge mayor se manifestó en 1971; pero que terminó por atomizarse bajo la influencia de grupos de extrema izquierda. Con todo, sirvió de prueba para saber que en materia de reformas modernizadoras, el país tenía grandes reservas de movilización social.

Pero el “modelo” nuevo de régimen no incluía la movilización social como uno de sus rasgos. Más bien incluyó su hostilización e, incluso, por momentos, su cri-

minalización, como algunos se habituaron a denunciarlo. El régimen del Frente Nacional no incorporaba lo social con sujeto propio (la masa popular organizada) en su proyecto de modernización. Este se limitaba a redistribuir la renta proveniente de las bonanzas internacionales entre sectores organizados con poder, y a realizar reformas moderadas de ajuste, a través de un transaccionismo engorroso y reductor, entre las distintas facciones políticas en que se dividían los dos partidos tradicionales.

Con ese estilo aplicado para obtener gobernabilidad a punta de un transaccionismo entre élites, la solución del “problema social” se retrasaba o simplemente se aplazaba, como terminó sucediendo con la reforma agraria. En todo caso, cuando se trataba de tocar los privilegios de sectores poderosos, se optaba por la conservación del *status quo*, no por el cambio.

Por otra parte, el liberalismo, relegitimado una vez más por reacción contra la violencia “chulavita” y contra el autoritarismo de los gobiernos conservadores, mantuvo su capacidad para capturar el imaginario de cambio y de progreso y para cooptar a sectores y dirigentes progresistas, materia prima potencial para una izquierda socialista que participara del juego político legal. Pero el liberalismo del Frente Nacional ya no era el de los años treinta. Su propio destino no estaba en conexión con el destino del cambio social que demanda el momento; y de ese modo había comenzado a

vaciarse de “sentido histórico”, aunque siguiera dotado de una gran funcionalidad instrumental para manejar el poder y para reclutar adhesión del pueblo.

En la medida en que conservaba su capacidad de cooptación de las alas progresistas que no querían salirse del “sistema”, dejaba sin espacio cualquiera opción seria de socialismo democrático. Y en la medida en que no proporcionaba sentido histórico a la Nación y se había “conservatizado”, provocaba reacciones extremistas entre algunos círculos de jóvenes radicales que, por las características del Frente Nacional, asumían que el sistema estaba restringido frente a toda participación política de carácter alternativo. En consecuencia, comenzaron a conformar distintas opciones de extrema izquierda; en unos casos como proyectos militares y, en otros, como sectas, incapaces por cierto de construir un partido con algún grado de credibilidad ante la opinión pública.

El Frente Nacional proporcionaba, sin duda, gobernabilidad al régimen político, pero se revelaba incapaz de ofrecer un esquema adecuado para anticipar conflictos sociales y para emprender con eficiencia las reformas que ellos exigían.

6. EL CONFLICTO SOCIAL SIN REPRESENTACIÓN POLÍTICA

De esta manera, a los problemas representados se sumaron nuevos conflictos, surgidos de las soluciones traumáticas y perversas, que los primeros recibían de

modo espontáneo. Así, al problema agrario, no resuelto, se sumó la colonización de la Orinoquía y de la cuenca amazónica o también de algunos valles interandinos, abiertos a la extensión de la frontera agrícola. Fue una colonización tardía e incesante, que albergaba un potencial de conflictos fácilmente derivables en violencias de distinto orden. Pero lo peor estaba por venir cuando esos mismos territorios pasaron a ser lugares para los cultivos ilícitos, base de una economía de acumulación rápida y violenta, y colchón para nuevos procesos conflictivos de ascenso y de enriquecimiento, en una sociedad con grandes desigualdades.

Todo ello no vino sino a echarle fuego al largo conflicto, del cual eran agentes algunas guerrillas, ahora catapultadas por efecto de las fuertes desarticulaciones sociales que esos nuevos procesos han supuesto.

La sociedad colombiana ha vuelto a sumirse durante los últimos tres lustros en una violencia múltiple, en la que, alternativa o simultáneamente, participan el narcotráfico, la guerrilla o los paramilitares (autodefensas). El resultado ha sido la ruptura de los lazos de civilidad que sostienen una Nación moderna.

A la par con esos procesos de violencia, la izquierda perdió impulso, se desvaneció; pero la guerrilla, en su versión más tradicional y comunista, terminó por fortalecerse sorprendentemente.

Los procesos de violencia le restan, al parecer, toda posibilidad a la izquierda de

hacerse a un lugar en el universo político colombiano. A más violencias, menos izquierda, es la relación inversa que salta de bulto en la historia reciente. Es, con todo, una relación que discurre en un sentido doble: la debilidad de la izquierda facilita la aplicación de estrategias de violencia en los conflictos, mientras la violencia, ya en marcha, condena a la izquierda a su mínima expresión. No es porque haya mucha izquierda que sobreviene la violencia. Es por que hay muy poca.

En términos sociales, la debilidad de la izquierda y, de paso, la del movimiento social, implican una correlación absolutamente desfavorable de fuerzas frente a viejos o nuevos actores que saltan por causa de las espontáneas mutaciones sociales. De hecho, la ausencia de una izquierda fuerte obra como “vacío” político, como “no lugar” que es ocupado por los desplazamientos que realizan otros actores, en su búsqueda no regulada de mejores condiciones de poder. En otras palabras, es un “vacío”, que al ser ocupado por otros actores sociales, en medio de las dinámicas que imprime una modernización inacabada, provoca crisis cuasi-permanentes, fácilmente convertibles en pequeñas guerras, dadas las condiciones específicas de Colombia.

El hecho es que las violencias que se han recrudecido en el periodo que va de 1987 hasta el presente sobrevinieron después de que languidciera, con la revista Alternativa y el Movimiento FIRMES, la última tentativa, un tanto mediocre hay

que decirlo, de formar una corriente creíble de socialismo democrático. Antes, se había disuelto el movimiento campesino y la protesta sindical había perdido energía, después de la cresta alcanzada durante el paro cívico de 1977.

En Colombia, las violencias suelen ser portadoras de un sesgo más o menos oculto: el de ser contraofensivas dirigidas a hacer retroceder avances institucionales o sociales. También están encaminadas a debilitar la posible resistencia de algunos sectores sociales, obstáculo potencial para mantener el *status quo* o para garantizar una determinada distribución de la renta, sobre todo en el orden local y regional.

Desde mediados de los años ochenta, se produjo una contraofensiva severa, cuyo blanco eran los avances políticos y sociales que el sindicalismo o la izquierda radicales habían conseguido en algunas regiones, como Urabá y el Magdalena Medio. Se trataba de una contraofensiva militar y social que se salía de los marcos institucionales, relacionada más bien con formas privadas de justicia. Aunque en primer término estaba motivada por contrarrestar a la guerrilla y por eliminar su “brazo político”, en el fondo obedecía a la lógica de defender la grande o mediana propiedad agraria, establecida recientemente en función del mercado interno o de las exportaciones; y que además comenzaba a pasar a manos de un nuevo capitalismo, representado por el narcotráfico, de naturaleza ilegal y propenso a tácticas de choque, en contradicción con el “estable-

cimiento” y, a la vez, interesado en hacer limpieza contra sus otros enemigos, que también son los enemigos del sistema -las guerrillas, las organizaciones populares y los partidos de izquierda radical como el “comunista”-.

Sin duda, el más afectado en esas circunstancias fue la Unión Patriótica -UP-, el proyecto político sostenido por la izquierda comunista, que fue exterminado en dicha contraofensiva.

En 1978 había tenido lugar una contraofensiva, esta vez de origen institucional, la cual estuvo simbolizada en el “Estatuto de Seguridad”. Era la reacción oficial contra el “Paro Cívico Nacional” de 1977. También contra los numerosos paros cívicos que con carácter local menudeaban por entonces. Pero además era la forma coercitiva con la que el gobierno pretendía prevenirse frente al desafío del M-19, deseoso de ejecutar golpes armados de carácter urbano.

El “Estatuto de Seguridad” sirvió no sólo de “prevención” contra el reto de la guerrilla urbana. También sirvió para atender contra los derechos humanos. En los marcos que ofrecía la resistencia contra esta política oficial, tuvo lugar la ya mencionada tentativa de crear una izquierda democrática, capaz de superar el ideologismo y la fragmentación de los grupos de extrema izquierda; y, a la vez, de atraer la franja progresista y radical del “establecimiento”; tanto más cuanto que el liberalismo para entonces ya no sólo evidenciaba orfandad en su sentido histórico, sino que coyun-

turalmente daba muestras de una inclinación por las salidas coercitivas frente a los conflictos sociales.

La oposición a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y al régimen de restricción de las garantías civiles fue exitoso no sólo por sus resultados sino porque logró unir a la izquierda con la franja progresista del “establecimiento”. Una y otra se unieron por un objetivo específico, pero no pudieron marchar hacia un proyecto político.

Por su parte, FIRMES sí tuvo, en esos momentos, el propósito de convertirse en el proyecto de un “partido” de la izquierda democrática. Consiguió juntar algunas de las fuerzas de la extrema izquierda de los años setenta con personalidades provenientes de una franja progresista que oscilaba entre el partido liberal y una izquierda socialista inorgánica. Sin embargo, la precariedad de su organización, su muy débil implantación social y su falta de cohesión ideológica, fueron los factores que le impidieron hacerle frente a dos retos. De una parte, a las exigentes campañas electorales, en las cuales una derrota para el recién nacido podía significar la desbandada; y, de otra, a las interferencias de otro actor de la época, el M-19, que aunque tenía su propio proyecto militar, no renunciaba a camuflarse dentro de FIRMES. Ninguno de los dos retos pudo ser sorteado por lo que muy pronto comenzó a declinar, dejando allanado el campo para que solo los grupos guerrilleros se apropiaran del polo alternativo a las élites

en el poder; y, por consiguiente, también para que sobrevinieran contraofensivas por parte de las “fuerzas oscuras”. FIRMES evidenció, a este respecto, la dificultad que tiene todo proyecto de izquierda democrática para desprenderse del lastre que significa tanto la interferencia como la competencia de los grupos armados; en lo que se refiere a posicionarse como la alternativa de poder.

7. MODERNIZACIÓN SIN IZQUIERDA, MODERNIZACIÓN CON VIOLENCIAS

Derrotado por fin el “Estatuto de Seguridad”, un nuevo gobierno, el de Belisario Betancur (1982 - 1986) inició un proceso de negociaciones, con vistas a un acuerdo de paz, primero con el M-19 y luego con las FARC. Su único resultado inmediato fue una tregua con ambas guerrillas. En el marco de los acuerdos, se dio impulso a la UP, la que recibiendo el respaldo de esta guerrilla y la orientación del Partido Comunista, se planteaba, sin embargo, como un movimiento democrático de oposición, radical pero amplio.

Desaparecida con rapidez la tentativa de una izquierda socialista, el hilo de cuya tradición se había roto desde 1930, apareció otra tentativa de una izquierda electoral amplia, pero esta vez bajo el signo de la orientación comunista y, por tanto, marcada por el ideologismo radical antisistema y prisionera de una profunda ambivalencia con respecto a la lucha armada, a cuya defensa nunca pudo renun-

ciar; convertida, entonces, en blanco fácil para una campaña de exterminio, en la que parecieron acordarse distintas fuerzas; unas originadas en las conductas desviadas de agentes estatales y otras en el nuevo mundo del capitalismo ilegal, pero en todo caso, inscritas en la lógica de conservar cierto *status quo* de poder en las regiones, a la vez que presuntamente se le quitaba oxígeno a la guerrilla.

Esta, por el contrario, pareció crecer desde los años ochenta. Al comenzar la década de los noventa, el experimento de la UP quedó destruido por la eliminación física de sus miembros. Al mismo tiempo, las FARC experimentaron un crecimiento impresionante en capacidad de combate, en control territorial y en agrupamiento de hombres. A medida que se ahogaban las opciones legales de izquierda, parecía tomar fuerza la opción armada.

Sí las débiles tentativas de una izquierda democrática no encontraban el terreno para prosperar en medio de las diversas violencias en que degeneraban los conflictos sociales, la guerrilla -al menos las FARC- parecía encontrar en las mismas circunstancias el terreno abonado para tomar mayor impulso: un nuevo aliento que, por cierto, se ha traducido menos en fuerza política que en crecimiento militar; más en fuerza que en legitimidad.

Así, las contraofensivas de derecha, que con distinto origen se han dirigido contra el movimiento social o contra la izquierda legal, han terminado preparando el terreno para que se fortalezca la opción arma-

da. Una opción armada que, persiguiendo su propia cola, renuncia a un proyecto de legitimización política frente al resto de la sociedad, con lo cual se condena a fomentar prácticas de autoritarismo y de exclusión violenta, sin organizar un proyecto alternativo al poder. Sin una izquierda socialista de carácter moderado, que transforme los conflictos en energía alternativa, la guerrilla termina por degradarlos aún más, potenciando todo lo que aquellos tienen de exclusión y de destrucción.

La ausencia de una izquierda de peso ha favorecido, de esta manera, el crecimiento de las opciones armadas. Y, con ello, la propagación de las violencias.

La modernización en Colombia se ha visto privada de una izquierda democrática, pero, en cambio, ha contado con la presencia de violencias múltiples, casi permanentes. Las violencias parecen derivar estructuralmente de la forma incompleta y tardía como se ha desenvuelto la modernización. También de la forma asumida por el régimen político, que a pesar de abrirse a la posibilidad de reformas, se manifiesta incapaz de culminarlas. El sistema, que ha sido capaz de conseguir en ciertos periodos históricos una coalición estable entre las élites ya establecidas en el poder, se revela incapaz de integrar una coalición más amplia y flexible, que incorpore en el juego por el poder a fuerzas alternativas, representativas de los sectores subalternos y de las clases medias; lanzados aquellos y éstas a la participación dentro de la esfera pública, por efectos de

esa misma modernización incompleta.

Las mutaciones sociales, que en los últimos cuarenta años han sobrevenido a la par con la urbanización, la descomposición campesina y el poblamiento colonizador de los «territorios nacionales», han carecido de un agente político, en condiciones de simbolizar sus reivindicaciones en términos generalizables. Los cambios de los años treinta contaron con el ala reformista del liberalismo para ese papel simbolizador. Para los cambios que el país enfrentaba después de los años sesenta no existió ninguna fuerza nueva que les diera sentido en forma de simbolización positiva y generalizable. Ante dicha ausencia, apareció, de nuevo, la violencia como la expresión espontánea y negativa de esa incapacidad de simbolizar y de integrar en términos históricos el conflicto social.

La presencia de múltiples violencias ha sido el precio que el sistema político ha tenido que pagar por la ausencia de una fuerza política, capaz de producir sentido histórico a sus necesidades contemporáneas.

BIBLIOGRAFÍA

- Pécaut, D., 1978, *Orden y Violencia en Colombia 1930-1954*, Siglo XXI, Bogotá.
- Bosetti, G. (comp.), 1996, *Izquierda Punto Cero*, Paidós, México.
- Deas, M. y Gaitán, F., 1995, *Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia en Colombia*, Bogotá, FONADE/DNP.
- Delgado, O, et al., 1993, *Modernidad, democracia y partidos políticos*, Fidec - Fescol, Bogotá.
- Fals Borda, O. et al., 1985, *El Marxismo en Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, *passim*.
- Garay, L., 2002, *Repensar a Colombia*, Talleres del Milenio – PNUD, Bogotá.
- García, R. 2002, “El Conflicto Armado o la Cara Invertida del Régimen Político”, en *Revista Foro*, No. 44, mayo, Bogotá.
- García, R., 1995, “Colombie. Le Bipartisme, Entre Fidelité Traditionnelles et Redefinition de L’Identité Politique”, en *Problemes de Amerique Latine*, enero – marzo, La Documentation Francaise, París.
- Gómez, H., et al., 1998, *¿Para donde va Colombia?*, Tercer Mundo, Bogotá.
- González, F., 1997, *Para Leer la Política*, CINER, Bogotá.
- Guillen, F., 1979, *El Poder Político en Colombia*, Editorial Punta de Lanza, Bogotá.
- Kalmanovitz, S., 1997, *Economía y Nación*, Tercer Mundo, Bogotá.
- Leal, F. y Davila, A., 1990, *Clientelismo. El Sistema Político y su Expresión Regional*, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
- Leal, F., 1984, *Estado y Política en Colombia*, Siglo XXI, Segunda Edición, Bogotá.
- Molina, G., 1988-1989, *Las Ideas Liberales en Colombia*, Tercer Mundo, Bogotá.
- Oquist, P., 1978, *Violencia, Conflicto y Política en Colombia*, Banco Popular, Bogotá.
- Ortiz, C., *Estado y Subversión en Colombia*, CEREC – CIDER, Bogotá, 1985.
- Palacios, M., 1995, *Entre la Legitimidad y la Violencia. Colombia, 1875 – 1994*, Norma, Bogotá.
- Pécaut, D., 2001, *Guerra Contra la Sociedad*, Espasa Hoy - Editorial Planeta, Bogotá

Pizarro, E., 1991, *Las FARC*, Tercer Mundo-IEPRI, Bogotá.

Tirado, A., 1978, “Colombia, Siglo y Medio de Bipartidismo”, en *Colombia Hoy*, Siglo XXI, Bogotá.